

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 220

FECHA: 29 de Junio de 2015

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
AMÉRICA LATINA	EE.UU., LA PEOR AMENAZA LATINOAMERICANA	2
COLOMBIA	LA MEMORIA COLECTIVA CLAMA POR LA JUSTICIA POPULAR	3
	ENTREVISTA A JORGE MOLANO, ABOGADO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA	5
GUATEMALA	REPRESA HIDROELÉCTRICA "VERDE" PROVOCA ACUSACIONES DE FLAGRANTES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	7
HONDURAS	CON EL ASESINATO DE HÉCTOR ORLANDO MARTÍNEZ MOTIÑO, PRESIDENTE DEL SITRAUNAH, SECCIONAL CHOLUTECA, SON 14 PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ASESINADAS	10
MÉXICO	MORENA, LA ÚLTIMA ESPERANZA DE MÉXICO	11
NICARAGUA	AJE NICARAGUA ACUSADA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. POBLADORES MOVILIZADOS CONTRA TRASNACIONAL QUE PRODUCE Y COMERCIALIZA BIG COLA	12
	REALIZAN EN MANAGUA PRIMERA CUMBRE DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA LATINA	14
PANAMÁ	EL EXPRESO CHINO EN AMÉRICA LATINA	14
VENEZUELA	MENSAJE DE LA LA FUNDACIÓN LATINOAMERICANA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOCIAL	15
	GOEBELS EN VENEZUELA: COMUNICADO DEL COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID	16

AMERICA LATINA

EE.UU., LA PEOR AMENAZA LATINOAMERICANA

Un asunto de “estrategia” de un imperio decadente, el de Estados Unidos (EU), que da coletazos y aun así se resiste a morir. Sigue “trabajando” al modo como lo sabe hacer: imponiendo sus políticas por el mundo para conseguir sus fines, en un plazo de tiempo de unas pocas décadas, de unos cuantos años. Valga decir, con políticas redefinidas o rediseñadas desde los autoatentados del 11 de septiembre 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York para acá.

Solo recuérdese que en América Latina a EU no le cuaja la idea del “terrorismo”, para con ese pretexto de “falsa bandera” atacar interviniendo a los países. Como le funcionó en Irak y en Afganistán, para apoderarse del control energético y las drogas. No. Pero le funciona a la perfección la “guerra contra las drogas”, en aras de la cual está controlando el negocio, a la vez que militarizar aquellos países como Colombia y México, sentando las bases para la desestabilización. Con ambos países, sobre todo con este último, le está funcionando muy bien la perversa “guerra antidrogas”, a la sombra de la “ayuda” del “Plan Mérida”.

Valgan algunos ejemplos de dicha estratagema:

1.- Los planes de defensa de los intereses de empresas estadounidenses generan situaciones de crisis desestabilizando a los gobiernos “no afines” en Latinoamérica, como sucede en los casos de Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, etcétera. Los países tienen, pueden y deben buscar sus propias vías para salir del atraso, hacer y aplicar sus mejores políticas económicas. Dar al traste con cientos de años de colonialismo, explotación y sumisión.

2.- Utilizando igualmente planes desestabilizadores, pero a un paso más lento (estilo “guerra de baja intensidad”, por otros medios), con aquellos gobiernos que son “aliados”, Estados Unidos los desestabiliza pero al mismo tiempo los utiliza como trampolín contra otros que intentan mantener una relativa “autonomía” o independencia en sus políticas internas. Países sometidos o controlados como México, Colombia y Perú, donde avanzan los planes de desestabilización imperial; otros como Honduras y también Colombia (ambos con bases militares), que le sirven a EU de plataforma contra otros, los del resto de Centroamérica y Sudamérica en este caso.

3.- Contra Cuba la táctica es otra, diferente a la de los últimos 50 años. Barack Obama, que resultó uno de los presidentes menos confiable para el mundo, porque sirve perfectamente a los intereses angloamericanos, ha vuelto a la vieja política de “la zanahoria y el garrote”. Con el garlito de “reconocer” que su política de bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla no le ha funcionado —tampoco ve en ello su derrota—, ha comenzado a operar con otros medios para conseguir los mismos fines: desestabilizar al régimen cubano de los Castro desde adentro, al tiempo de romper el protocolo, el ejemplo de alta moral que ha significado la Cuba “digna” para Latinoamérica frente al imperio. De todas maneras, nada se logrará contra la enseñanza de los pueblos. Vietnam es el mejor ejemplo, le sigue Cuba.

4.- Las estrategias para lograr sus fines son orquestadas por las agencias de inteligencia y de espionaje con aprobación o dirigidas desde Washington, y por los centros de operación como las embajadas en todos los países, y otros organismos de “ayuda” como la USAID (por decir las menos), hasta las claramente desestabilizadoras como la CIA y DEA. Si en EU no hay golpe de Estado es porque no hay Embajada de EU, repite con frecuencia Evo Morales. Pero es realidad una vieja anécdota (años 60 y 70) del golpismo contra los gobiernos de América Latina. No obstante, ¿el asesinato de Kennedy no fue una suerte de golpe de Estado? Ciertamente, y orquestado por la propia CIA.

5.- Lo que sirve a las empresas multinacionales u oligopólicas de origen estadounidense, funciona también para los intereses imperiales de EU. Desde el punto de vista de la economía de “libre mercado”, ese discurso es uno de los mejores “artilugios” del capitalismo para controlar económicamente a los países a través de las empresas que generan “inversión” y “empleo” para el “desarrollo”. Son las directrices neoliberales que imponen las políticas macroeconómicas que conllevan la destrucción de las clases media y trabajadora, y atenta contra la población en general. Los tratados comerciales son una herramienta de control de los gobiernos y para fines externos y

claramente perversos. Ambos procedimientos, los tratados comerciales y las políticas neoliberales, instrumentos de la susodicha globalización que, se presume, sacaría a los pueblos de la miseria.

Ninguna de las tácticas mencionadas resulta favorable a los Estados latinoamericanos. Todo lo contrario, son atentatorios de la organización estatal y nacional de los pueblos. La desestabilización gestada con la aplicación neoliberal rompe las estructuras de los estados nacionales que costaron décadas construir, y genera las bases para la incorporación de otros métodos, como son los violentos (los espacios ganados por las mafias, no pocas veces cubiertas desde los poderes políticos locales corruptos). Eso le pega directamente al corazón de las estructuras del Estado, a los gobiernos y a los mecanismos de control social para la consecución del equilibrio y el bienestar. Rompe con los sistemas de organización política y mete bulla a aspectos como las elecciones, la representatividad, la legitimidad y los fines nacionales de largo plazo.

No obstante ello, aun así las políticas de Washington siguen interponiendo sus ardidés con la finalidad de derrocar aquellos gobiernos no alineados a sus intereses. Venezuela es un corazón batiente en Suramérica. Ecuador otro tanto. De Honduras, ni que decir que las declinaciones desde Micheletti (tras el derrocamiento por golpe de Estado contra Manuel Zelaya) a la fecha son de sometimiento.

No queda más que prevenir y actuar. La denuncia es crucial, puesto que las políticas de los EU son de aplicación constante; no le paran ni un momento. En México en particular, pero en Latinoamérica en general, desde los gobernantes hacia los demás círculos de la sociedad, incluyendo al sector académico y a los medios de comunicación, todos están acostumbrados a ver las cosas a toro pasado; es decir, analizar, revisar, concluir, planificar y reaccionar cuando los hechos han sido consumados.

En tanto la estrategia de los gringos es continua utilizando la prospectiva para analizar y la ofensiva para crear su propia realidad afín. Porque el gobierno trabaja permanentemente como Estado en guerra. Es violencia día tras día, porque aplica la estrategia del imperio romano: de vasallaje, sometimiento, violencia y guerras continuas. No queda más que la denuncia. Luego vienen la solidaridad, la organización y la reacción, individual y colectiva. El asunto no es solo Latinoamericano, sino mundial, porque en otras regiones también hace lo propio.

Fuente Salvador González Briceño. Alai

COLOMBIA

LA MEMORIA COLECTIVA CLAMA POR LA JUSTICIA POPULAR

Lo que pasó con los informes de la Comisión Histórica del Conflicto es una señal del rumbo que la élite de este país, apoyada en sus intelectuales, periodistas y medios de comunicación quiere darle al proceso de paz y al posconflicto. La idea es que los guerrilleros se desmovilicen, sin que el Estado y los empresarios se tengan que incomodar siquiera un poco, sin que tengan que reconocer ninguna responsabilidad en esta negra noche que ha vivido Colombia ni pagar nada por ello. Eso mismo parece estarse jugando hoy con la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

El gobierno empezó por acomodar en la Comisión la mitad de sus integrantes con la función de exculpar al Estado y a los empresarios de su responsabilidad en esta la guerra. Cuando la calidad de dichos informes mostró la flojera intelectual de sus autores, éste optó por manipular las relatorías que daban cuenta de los informes y los debates. Particularmente lo hizo así el relator Eduardo Pizarro León Gómez, desconociendo las observaciones de Renán Vega Cantor y desestimando los puntos centrales de su informe, anteponiéndole el informe de otros autores como si fueran suficientes para refutarlo.

Seis de los doce comisionados aportaron argumentos históricos y analíticos para demostrar que la guerra en Colombia responde a causas objetivas, centradas en las formas como se ha organizado la explotación capitalista en este país y el tipo de institucionalidad que la ha sostenido. A pesar de los argumentos rigurosamente fundados, y los autores, cuya estatura intelectual era ampliamente

reconocida en Colombia y en el mundo, tales como Alfredo Molano, Renán Vega, Darío Fajardo, Javier Giraldo y Jairo Estrada, las verdades históricas que evidenciaba fueron ignoradas en los grandes medios de comunicación. Y cuando algún periodista o intelectual del régimen se refirió a ellos, lo hizo para desestimarlos de la forma más grosera, sin esforzarse siquiera en tejer argumentos serios.

Un ejemplo ramplón es el de León Valencia, que utilizó una de sus columnas de opinión en semana para desbarrar del informe, porque, según él, ninguno señalaba con claridad las causas del conflicto y de su persistencia. Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nadie realmente serio podría esperar que estos informes rebelaran algo nuevo; las causas del conflicto en Colombia son ampliamente conocidas, y se reproducen y evidencian cada vez con mayor descaro, pero también han sido ampliamente negadas y desestimadas por el establecimiento y sus intelectuales de oficio. El valor de los informes que estos estudiosos presentaron no radicaba en la novedad, sino en los nuevos datos que aportaban para hacerlos tan evidentes que nadie realmente serio pudiera desmentirlos sin caer en el ridículo. Además, está la rúbrica de los autores, su talante intelectual y ético, su historia académica y su repertorio investigativo en el tema. Algo de lo que carecen los autores de los informes por encargo que seleccionó el gobierno para que le lavaran la cara.

Lo peor fue el circo mediático que montaron algunos periodistas y algunos medios contra el informe de Renán Vega, tratando de deslegitimar su tesis de que el conflicto armado en Colombia y su sostenimiento no podría explicarse sin la intervención de Estados Unidos y la subordinación estratégica de la élite colombiana, que construyó una contrainsurgencia nativa mucho antes de que se hubiera organizado una insurgencia propiamente dicha. Ni siquiera fueron capaces de desmentir los argumentos sino que quisieron deslegitimar su rigor investigativo tergiversando una entrevista que le hicieron y omitiendo información.

Estos intentos rampantes de ignorar o descalificar los informes críticos, nos obligan a preguntarnos qué intentarán hacer los medios masivos con los informes de la Comisión de la Verdad. De entrada, pareciera que el gobierno y las Farc hubieran pactado una Comisión sin dientes, pues la información que arroje no tendrá efectos jurídicos, lo cual, desde luego, puede convertirse en una estrategia para garantizar la impunidad. La comisión misma no está planteada como una instancia de investigación y parece reducir su función a garantizar la catarsis de las víctimas y las confesiones de los victimarios.

La catarsis es, desde luego, algo necesario para las víctimas, ello aliviana sus existencias y les permite normalizar hasta cierto punto sus vidas para continuar en la brega. Pero no es suficiente para construir una

sociedad en paz, después de haber atravesado tantas décadas de barbarie. En un proceso de estos la búsqueda de la verdad tiene que servir para construir la memoria colectiva del conflicto, sobre todo desde la mirada de las víctimas, y, desde luego, para que la justicia al fin se imponga. Que nada afecte a aquellos que han sido responsables de tanto dolor, después de que la verdad haya sido revelada, se convierte en otra afrenta insoportable para las víctimas.

No puede negarse que la reconstrucción colectiva de la verdad es uno de los asuntos más complicados, y tal vez un escollo fundamental en este proceso de diálogo. No solo porque pueden existir muchas verdades, sino porque la verdad individual o gremial es interesada según el sujeto que la emite y según lo que busque esconder o evidenciar. Y en este proceso sí que hay intereses en torno al problema de la verdad. De hecho el mismo Procurador General, tan interesado en que los miembros de las Farc vayan a la cárcel y los funcionarios del Estado se quedan tranquilos, piensa que “la Comisión de la Verdad pretende exculpar a las FARC y culpar al Estado”. Y el general Jorge Mora, en la Mesa de Negociaciones, se opuso siempre a que los militares reconocieran su responsabilidad en el conflicto, por el impacto que eso pudiera tener en las filas.

Si se trata de la construcción colectiva de la memoria de las víctimas, habrá que contar con que hay toda una maquinaria institucional, mediática y militar cuya función es tergiversarla, borrando la responsabilidad del Establecimiento en esta guerra. Los medios de comunicación son el mecanismo privilegiado de embotamiento de la verdad histórica y su función es lograr una reinserción poco traumática de la insurgencia en la vida civil, para no frenar el proceso de acumulación de capital y la explotación de nuestros recursos naturales, pero sin que cambie nada para la oligarquía, sin que

tenga que pagar por tanto oprobio, dolor y humillación a la que ha sometido a las clases populares, hasta el punto de obligar a algunos sectores a levantarse en armas.

Aquí es donde los medios de comunicación alternativos y populares juegan un papel fundamental, no solo en el proceso de paz, siempre amenazado por los titulares de prensa de los grandes medios, sino en la construcción de una sociedad en paz. Y más allá de los medios, sería importante el desarrollo de procesos de comunicación popular en el seno mismo de las comunidades, en sus propios territorios, donde la memoria se construye como un tejido que unifica y fortalece el espíritu colectivo en el dolor y la lucha. Son ellos realmente la posibilidad de que las víctimas tengan una voz efectiva, que se sustantive en la memoria colectiva de este país para que la verdad del horror no quede en el olvido ni en la impunidad, para que los responsables no se queden sin la sanción social que se merecen, ya que pretenden escaparse de la sanción penal. Al fin de cuentas, la justicia popular es más importante, y ésta se expresa en la deslegitimación definitiva de los victimarios. Esta es una de las tareas que debería unificarnos en los próximos años.

En Periferia (<http://periferiaprensa.com/index.php/editoria/1449-editorial-107-la-memoria-colectiva-clama-por-la-justicia-popular>)

ENTREVISTA A JORGE MOLANO, ABOGADO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

“Las estructuras paramilitares continúan actuando con impunidad”

Defender los derechos humanos en Colombia es una tarea de alto riesgo, entre otras razones, porque el paramilitarismo no ha desaparecido. “Continúa actuando y las agresiones permanecen en una absoluta impunidad”, sostiene el abogado defensor de los derechos humanos, Jorge Molano, quien ha participado en el X aniversario de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Molano forma parte de la red de defensores no institucionalizados dhColombia y es asesor de las organizaciones Nomadesc y Sembrar. Junto a dhColombia y el abogado Germán Romero, representa jurídicamente a víctimas y familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Manizales, el Palacio de Justicia, la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la “Operación Dragón” y el asesinato de Jhonny Silva. El abogado y activista ha sido distinguido en 2015 con el premio que otorga “Lawyers of Lawyers” de Holanda a los abogados que ejercen su profesión en situación de riesgo.

-El informe de la IV Delegación de Juristas en materia de Derechos Humanos (2014) señala que Colombia vive “un momento crucial”. ¿Se ha constatado un aumento de las violaciones de los derechos humanos?

-En 2014 persistieron los ataques a los defensores de los derechos humanos, lo que incluye a sindicalistas, luchadores por la tierra, población campesina e indígena. En el año 2014 se registraron 626 agresiones (entre las que destacan 488 amenazas, 55 homicidios y 41 atentados). Los ataques se focalizaron en los luchadores por la tierra, y las amenazas en los trabajadores por la paz, integrantes de ONG y sindicalistas. Los asesinatos afectan principalmente a los trabajadores por la tierra. En el primer trimestre de 2015 se está produciendo un incremento muy claro respecto al pasado año. Entre enero y marzo se han registrado 295 agresiones (destacan 249 amenazas, 19 asesinatos y 20 atentados).

-¿En qué territorios del país se concentran las agresiones?

-Según los datos del primer trimestre de 2015, los asesinatos se producen básicamente en Antioquía, Cauca, y el Caquetá. Son las zonas donde más se focaliza el conflicto armado entre el estado y las organizaciones insurgentes. Bogotá, donde los crímenes obedecen más bien a la presencia paramilitar, también destaca por el número de asesinatos. El 78% de las agresiones son atribuibles a paramilitares y el 5% a la fuerza pública. No hay reportes en relación con la guerrilla. Además, de las 295 agresiones producidas entre enero y marzo de 2015, 130 han ocurrido en Bogotá, 42 en el Cauca, 40 en el Valle del Cauca y 39 en el Atlántico.

-¿Qué conclusiones cabe extraer de estos números? ¿Puede hablarse de impunidad?

-Desarrollar la lucha por los derechos humanos en Colombia continúa siendo una labor de alto riesgo. El paramilitarismo, contra lo que ha dicho el gobierno, no ha desaparecido. Tampoco se ofrecen garantías para los defensores de los derechos humanos en el contexto de los diálogos de paz, y esto es muy grave con vistas a un escenario post-conflicto. Las agresiones permanecen en una absoluta impunidad. No hay una labor de investigación seria por parte de la justicia. Las estructuras y agentes paramilitares continúan actuando con libertad y sabiendo que no se les va a perseguir. Por último, el balance demuestra que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes, porque han limitado la protección de los defensores de los derechos humanos al ámbito material (escortas y carros blindados), pero sin entrar en el origen de los ataques.

-¿Tiene alguna relación con las agresiones la presencia de empresas multinacionales?

-Hay casos como el de AngloGold Ashanti, empresa sudafricana que llega a principios de 2000, y que antes de aterrizar en Colombia financió en la República Democrática del Congo al Frente Nacional Integracionista, una estructura paramilitar. Es decir, la compañía ya tiene antecedentes. AngloGold Ashanti solicitó permisos para la explotación de oro en Colombia en más de tres millones de hectáreas. En el 99% de los territorios donde se iban a desarrollar los proyectos, los campesinos fueron previamente desalojados de las tierras, mediante grupos paramilitares. Hubo despojos en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquía, Santander y Bolívar.

-¿Hay ejemplos de represión contra dirigentes populares por parte de esta compañía?

-Hemos conocido casos como el del asesinato del líder minero Alejandro Uribe Chacón, en septiembre de 2006. Fue un líder que participó en reuniones para oponerse al ingreso de la multinacional. Alejandro es presentado por el ejército como “guerrillero” muerto en combate. Además, la AngloGold pide medidas de protección y paga al ejército para que le brinde seguridad. Así, se va privatizando el ejército, que en la práctica se convierte casi en la guardia de seguridad de las multinacionales. De hecho, es el cuerpo militar el que en un informe de inteligencia acusa a Alejandro Uribe de ser “guerrillero”, por promover reuniones de la comunidad contra la entrada de la empresa. En zonas donde la AngloGold empezó a operar, aumentó la militarización, y en consecuencia los abusos frente a las comunidades. Hoy, muchas de las tierras en las que se despojó a los campesinos son utilizadas por las transnacionales de la minería o los agrocombustibles.

-¿Hay una criminalización de los sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos?

-Desde la fuerza pública, y particularmente el Ministerio de Defensa, se considera que los activistas por los derechos humanos (ONG, sindicalistas, población campesina...) hacen parte de los grupos “subversivos”. Este discurso se mantiene hoy dentro de la estructura del ejército. Quienes defienden a las víctimas hacen, según estas estructuras militares, una guerra jurídica con el fin de paralizar y desmoralizar a las tropas. Este discurso se repite desde las comandancias y guarniciones militares, por ejemplo contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó. Estas comunidades se crearon en 1997 en el Urabá antioqueño con cerca de 900 integrantes, de los que 260 han sido asesinados hasta hoy.

-¿De qué modo se ha estigmatizado a la Comunidad de San José de Apartadó?

-Recientemente hemos conocido la existencia de manuales dentro del ejército, en uno de los casos, creado en febrero de 2002 en Bogotá por el Centro de Educación Militar “Escuela de Armas y Servicios”, en el que se dice: “Es de obligatorio conocimiento para nosotros como militares para tener un mayor conocimiento y poder manejar estas comunidades dentro del ámbito de la guerra política, y de estos conocimientos depende el adecuado manejo para quitarle los grupos subversivos”. Aunque con fatal redacción, se les señala como “enemigo de guerra”. Altos mandos del ejército estigmatizan a esta comunidad, que continúa siendo blanco de ataques. Entre el 8 y el 16 de junio la Comunidad de Paz de San José ha denunciado seis agresiones por parte de militares y paramilitares.

-Representas, con la Red de Defensores de Colombia y el abogado Germán Romero, a familiares y víctimas de la violencia militar y paramilitar en casos como la llamada “Operación Dragón”. ¿En qué consistió?

-El 22 de septiembre de 2004 el senador Alexander López, dirigentes del sindicato SINTRAEMCALI (empresa de servicios públicos de Cali) y defensores de derechos humanos fueron alertados de un plan para asesinarlos, en el que estaban vinculados miembros del ejército, de la empresa EMCALI y otras empresas privadas. Los hechos fueron puestos en conocimiento del vicefiscal de la nación. Ese mismo día la Fiscalía ordenó registros domiciliarios en Cali y Medellín, en los que se obtuvieron computadores y la agenda de un coronel del ejército. La información que allí reposaba era una estrategia para infiltrar sindicatos, penetrar en los esquemas de seguridad y conocer las actividades habituales de las víctimas. En definitiva, era un plan para atacar a quienes se oponían a la privatización de la empresa.

-¿En qué punto se encuentra el proceso judicial?

-Actualmente se está celebrando el juicio contra un coronel del ejército y otros dos mandos. Es de los pocos casos en que se logró evitar un crimen. Como aspecto relevante, el Ministerio del Interior, que suministraba los mecanismos de protección a las víctimas, era quien al tiempo proporcionaba información a los que pretendían acometer el atentado.

-Lleváis asimismo el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Manizales (Caldas). ¿Cuál es la historia?

-Tres jóvenes son llamados en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) para desplazarse a Manizales (a una distancia de 267 kilómetros) bajo el ofrecimiento de un empleo, que les hace un soldado. Cuando llegan a Manizales, son obligados a descender del vehículo. Unos soldados les obligan a arrodillarse, les disparan y asesinan a dos de los tres. El que se libra, logra huir y cuenta lo ocurrido. En este caso ha habido intento de asesinar a los testigos. Se ha amenazado reiteradamente de muerte a la madre de uno de los jóvenes asesinados, que ha tenido que abandonar el país. Por otro lado, los comandantes del batallón y quienes participaron en las operaciones fueron felicitados y condecorados. A las víctimas, se las presentó como muertos en combate dentro de las acciones frente a los grupos armados. Fueron dos de los 4.800 “falsos positivos”. Siete militares ya han sido condenados, todos ellos de baja graduación.

-¿Qué otros aspectos relevantes presenta el caso?

-El comandante de la brigada y el segundo comandante firmaron un acta el 17 de marzo de 2008 con el comandante del batallón, en la que dicen que le pagaron a un ciudadano el equivalente a 800 euros por la información que permitió causar la muerte de esos dos muchachos, el 7 de febrero de 2008. Actualmente se celebra el juicio al comandante del batallón. Los dos coroneles que pagaron por la información fueron ascendidos a generales. Pero el ciudadano declaró ante la Fiscalía que nunca dio información al ejército, que no recibió plata y que la firma donde dice que recibió plata es falsa.

-¿En qué fase se halla el procedimiento judicial?

-Está pendiente la investigación judicial contra los dos generales. El gobierno los ascendió, teniendo conocimiento de lo que sucedió en Manizales.

Enric Llopis - Rebelión

GUATEMALA

REPRESA HIDROELÉCTRICA "VERDE" PROVOCA ACUSACIONES DE FLAGRANTES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Se proyecta ubicar la represa de Santa Rita de 24 megavatios en el Departamento de Alta Verapaz al centro del país; cuenta con el respaldo del Banco Mundial, de varios bancos europeos y del gobierno guatemalteco. Pese a las acusaciones de agresiones, el Mecanismo para un Desarrollo

Limpio (MDL) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático otorgó su aprobación al propietario de la presa para que gane créditos compensatorios de carbono por la electricidad que generará la represa. Los créditos se podrán comercializar acorde al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. En una nación hoy azotada por agitaciones políticas sobre corrupción gubernamental, el proyecto es uno entre varios esfuerzos por reformar MDL.

Desde que se asignó la construcción de la represa de Santa Rita a una empresa guatemalteca llamada Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. en 2008, dicha construcción, actualmente suspendida, se vio empañada por la controversia. Los grupos de derechos humanos dicen que la presa fue aprobada pese a la falta del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas mayas q'eqchi y poqomchí que residen en el área en que se la proyecta construir. Dichos grupos mantienen que esta construcción les quitará a las comunidades sus tierras sin retribución alguna y les impedirá seguir usando el Río Icbolay, del cual dependen para tomar agua y para su agricultura. Aseveran que la mayoría de las comunidades carece de electricidad pero que el proyecto no se las brindará; en vez, alimentará de energía eléctrica a la red nacional.

"En la región, la empresa es la mayor vulneradora de los derechos humanos colectivos e individuales de la gente", le dijo a mongabay.com Máximo Ba Tiul, vocero del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, un grupo indígena activista en Guatemala que se resiste a la represa.

Las protestas pacíficas y los bloqueos que realizaron las comunidades terminaron en violencia, inclusive en varios asesinatos, desalojos forzosos y el encarcelamiento ilegal de líderes y lideresas de la comunidad, según alegan el grupo de Tiul y otros.

En 2013, por ejemplo, un empleado de Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., propietaria del proyecto, disparó y mató a dos niños mayas de 11 y 13 años de edad—en alegatos de activistas locales recogidos en las noticias. Se informó que el agresor estaba en busca de David Chen, tío de los niños y activista que se resiste a la presa de Santa Rita y que ya había escapado a un intento de rapto.

El asesinato de los niños generó un revuelo. Conforme a las noticias, 17 organizaciones locales emitieron una declaración conjunta de prensa el día de los asesinatos y responsabilizaron a "la Empresa Hidroeléctrica Santa Rita S.A. y al gobierno por violar los derechos de la población y provocar conflictos en el área".

Más tarde, en abril de 2014, un terrateniente local y sus guardias de seguridad, ligados a Hidroeléctrica Santa Rita S.A., dispararon a indígenas de comunidades que se hallaban en una ceremonia religiosa, mataron a una persona e hirieron a cinco, de acuerdo a grupos activistas. Unos meses después, en agosto, más de 1.500 oficiales de policía ingresaron a la región y asaltaron con gas lacrimógeno a 200 familias indígenas reunidas en una protesta pacífica contra la represa. Asimismo, los oficiales capturaron ilegalmente y humillaron a tres mujeres y dos hombres, de acuerdo a una carta enviada en octubre por más de dos docenas de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales a la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Según la carta, 7 personas murieron y 70 fueron heridas en enfrentamientos de este tipo. Además, 30 personas fueron ilegalmente arrestadas, 30 casas fueron reducidas a cenizas y varias familias se vieron obligadas a huir de sus casas y a buscar refugio.

Las represas, las minas y otros proyectos de marcada huella ecológica y que cuentan con respaldo gubernamental están en la mira pública en Guatemala, y se las está reexaminando a la luz de extendidas denuncias de violencia e intimidación en relación a los nuevos proyectos de infraestructura. En las últimas semanas, el país ha visto protestas masivas por una ola de escándalos de corrupción que llevaron a varias(os) de los principales funcionarios(os) de gobierno a renunciar, como la vicepresidenta Roxana Baldetti, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez, el ministro de Energía y Minas Edwin Rodas y el ministro del Interior Mauricio López Bonilla.

Un proceso de consulta de poco rigor

El Consejo de Pueblos de Tezulutlán y otros grupos activistas recalcan que la construcción de la represa de Santa Rita fue aprobada por el gobierno y el órgano MDL de NN. UU. sin consultar apropiadamente a las comunidades locales.

En 2014, mucho después de que empezaran a emerger las acusaciones de agresiones a los derechos humanos, la junta de MDL de NN. UU. registró la planta hidroeléctrica. Con ello confirió un aura verde al proyecto y permitió a Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. ganar créditos compensatorios de carbono que pueden comercializarse en el mercado europeo de carbono, que habilita a los países reducir sus emisiones de carbono para lograr sus metas de emisiones.

El costo de la represa hidroeléctrica está proyectado en unos \$67 millones, conforme a su Documento de diseño de proyecto. El proyecto está apoyado por un fondo de capital riesgo en el que han invertido el Banco Mundial y cuatro instituciones europeas de desarrollo — German Investment Corporation [Corporación alemana de inversión], Netherlands Development Finance Company [Empresa holandesa de financiamiento para el desarrollo], Agencia española de cooperación internacional y Swiss Investment Fund for Emerging Markets [Fondo suizo de inversiones en mercados emergentes]— según Carbon Market Watch, una organización con sede en Bélgica que vigila y analiza los mercados de carbono.

Las reglas de MDL requieren que las(los) funcionarias(os) del proyecto consulten con las comunidades locales afectadas y tomen en cuenta sus comentarios. Mas en el caso de la presa de Santa Rita, la consulta pública fue realizada descuidadamente, de acuerdo a grupos de derechos humanos.

En una carta de mayo de 2014 dirigida a la junta ejecutiva de MDL, el Consejo de Pueblos de Tezulutlán afirmó que el proceso oficial de consulta pública del proyecto sólo se comunicó con algunos miembros de la comunidad que, en su mayoría, ya apoyaban el proyecto. Es más, anotó el grupo, sólo se consultó a nueve de más de 30 comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Santa Rita. Según la carta, 24 de estas comunidades rechazaron el proyecto en reuniones comunitarias.

La junta ejecutiva de MDL revisó las denuncias hechas por los grupos locales de partes interesadas. De hecho, de acuerdo a Carbon Market Watch, ésta fue la primera vez que MDL revisaba formalmente un proyecto por alegatos de inapropiada consulta local. Sin embargo, en su carta de respuesta del 5 de junio de 2014, la junta ejecutiva concluyó que el proyecto "cumplía con los requisitos aplicables de MDL, inclusive con el proceso de consulta local a partes interesadas".

Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch, consideró que la decisión de MDL de tomar la consulta local con seriedad fue un "hito", pero dijo a mongabay.com que la junta no explicó su forma de revisar los reclamos. Por ejemplo, dijo Filzmoser, el comunicado de la junta de MDL señaló que el proyecto cumplía con todos los requisitos de MDL porque la autoridad nacional designada así se lo aseguró a la junta. Aparentemente, la junta de MDL se limitó a respaldar su aprobación en su correspondencia con funcionarias(os) asociadas(os) al proyecto, tal cual anotaron Carbon Market Watch y otros grupos de derechos humanos en su carta de octubre a la Relatora especial de NN. UU.

En Guatemala no es común consultar sobre proyectos medioambientales grandes, dicen las(los) activistas. Cuando Dinah Shelton, en esa época Relatora especial de NN. UU. sobre los derechos de pueblos indígenas, visitó el país en 2013, expresó su preocupación en un comunicado de prensa. Afirmó que "el estado otorgó las licencias actuales para minería y plantas hidroeléctricas sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, tal cual obligan los tratados internacionales que firmó Guatemala".

Un problema aún más grande con los proyectos sellados como verdes

Sin embargo, Santa Rita no es un caso aislado de proyecto sellado como verde y envuelto en violaciones a los derechos humanos. Varios proyectos generadores de energía que MDL aprobó en Guatemala y en otros países también fueron implicados, conforme a a estudios de caso compilados en 2013 por Carbon Market Watch.

Para citar un caso, al menos dos proyectos hidroeléctricos en Guatemala registrados por MDL vulneraron derechos humanos al no obtener el consentimiento informado de comunidades indígenas afectadas y al usar la violencia y los desalojos forzados contra comunidades que protestaron, según grupos de activistas e informes de prensa. Entre estos proyectos están la presa de Palo Viejo de 85 megavatios en la municipalidad de San Juan Cotzal y la presa Xacbal de 94 megavatios en la municipalidad de Chajul.

Un mes después de afirmar que la represa de Santa Rita había cumplido debidamente con las reglas de consulta local con partes interesadas, la junta de MDL acordó enmendar esas reglas en una reunión de su junta ejecutiva en julio de 2014. El cambio se dio conforme aumentaba la crítica sobre los procesos defectuosos de consulta en muchos proyectos aprobados por MDL. Las nuevas enmiendas redefinieron el alcance de las consultas locales a partes interesadas — por ejemplo, el grupo mínimo de partes interesadas que debe participar en las consultas, la forma de conducir las consultas y la información a ponerse a disposición de las partes interesadas.

"Este es, en principio, un gran paso adelante", dijo Filzmoser. "Lamentablemente, no considera necesario un mecanismo de cumplimiento ni un panel de investigación en los casos en que no se respetan las obligaciones nacionales o internacionales".

"Hasta ahora MDL no cuenta con un mecanismo de denuncias. Esperamos que esto cambie a la hora de reformar MDL como parte de las próximas negociaciones de CMNUCC en Bonn, Alemania, que empiezan el 1o de junio", agregó Filzmoser, refiriéndose a las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tal vez en un statu quo guatemalteco alterado por la conmoción gubernamental y social, y en reglas de MDL que están por cambiar, las comunidades en Alta Verapaz hallen una oportunidad en su lucha por cancelar definitivamente la represa de Santa Rita.

Fuente Shreya Dasgupta. Red Mongabay

HONDURAS

CON EL ASESINATO DE HÉCTOR ORLANDO MARTÍNEZ MOTIÑO, PRESIDENTE DEL SITRAUNAH, SECCIONAL CHOLUTECA, SON 14 PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ASESINADAS.

A la comunidad nacional e internacional, nuevamente nos vemos obligadas a informar la situación difícil que viven los empleados y sindicalistas universitarios en Honduras, cuando la noche de ayer 17 de junio de 2015, fue asesinado Héctor Orlando Martínez Motiño, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la ciudad de Choluteca, quien gozaba de la medida cautelar No. MC-253-14 otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); y a sesenta y nueve días de la desaparición forzada del sindicalista, Donatilo Jiménez, ex Presidente de este mismo sindicato en el Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Héctor Martínez, catedrático universitario, fue acribillado con 12 impactos de bala, por desconocidos que se movilizaban en motocicleta, y que presuntamente, le dieron persecución luego de salir de su centro de trabajo a las 9:00 de la noche, para dirigirse a su residencia en Marcovia, en cuyas cercanías le dieron alcance.

En fecha 31 de enero de 2015, le fueron notificadas medidas cautelares por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, quienes pudieron constatar el ambiente laboral hostil que vivía en el CURLP. Martínez denunció en la CIDH que la implementación de estas medidas no le era satisfactoria, que le generaban sospecha y temor, en su Facebook escribió:

"A pesar de estas medidas sigo siendo mayormente hostigado, perseguido y amenazado y blanco de atentado contra mi vida, por ello pido a Dios y a ustedes que nos mantengan en oración permanente".

El 09 de julio de 2014, Martínez fue víctima de un atentado en el campus universitario, cuando desconocidos, sabotearon su automóvil mientras permanecía estacionado en el parqueo del Centro universitario, a cinco metros de la posta de vigilancia privada. Desconocidos, aflojaron cinco tuercas de la llanta trasera de su automóvil, con el cual logró avanzar 8 metros y de inmediato la llanta salió de su eje. Motiño interpuso la denuncia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal y detalló que éste era el tercer atentado de esa naturaleza que sufría.

Antes de este atentado, el 16 de mayo de 2014, había denunciado los atropellos a los que era objeto por parte de autoridades universitarias, entre hostigamiento, campañas de desprestigio, problemas con incapacidades por razones de salud, y la persecución de que era objeto por parte de desconocidos que se conducían en un vehículo turismo, color blanco, desde el cual le habían tomado fotografías. La persecución en la universidad fue tal, que las autoridades llegaron a solicitar su movimiento migratorio para confirmar si en realidad fue atendido médicamente fuera de Honduras y solicitar al IHSS, que los médicos se asegurasen que realmente necesitaba incapacidades médicas. En esa oportunidad, el médico que lo atendió en la evaluación médica, ordenó inmediatamente su internamiento para controlar su presión arterial.

En reiteradas ocasiones el SITRAUNAH ha denunciado que sus miembros y miembras han sido víctimas de vigilancia permanente, hostigamiento y persecución, en las 8 sedes universitarias.

El 04 de Agosto de 2011, denunciaron públicamente que el Señor Donatilo Jiménez y tres personas más miembros del SITRAUNAH, en diferentes seccionales, eran víctimas de amenazas a muerte y que sicarios de la zona atlántica habían sido contratados para atentarse contra la vida de los cuatro sindicalistas. Hoy Donatilo continúa desaparecido.

En esa misma fecha el Sindicato denunció que miembros del personal de Seguridad de la UNAH, que no pertenecían la Empresa de Seguridad Privada contratada, Bacilides Baca y Javier Brooks, fueron asesinados en circunstancias poco claras. Y Rafael Arambú Rico supervisor de vigilancia fue víctima de amenazas a muerte.

El 10 de marzo de 2011, La Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), de ese entonces Magda Hernández, fue víctima de un atentado criminal, según los medios de comunicación dos sujetos en motocicleta le dispararon al rostro, en horas de la mañana a inmediaciones del portón del CURLA.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2015

DE LOS HECHOS Y DE LOS HECHORES

NI OLVIDO NI PERDÓN

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

MÉXICO

MORENA, LA ÚLTIMA ESPERANZA DE MÉXICO

Cuentan los libros de historia que Porfirio Díaz era un encanto para amansar gente: “perro con hueso en el hocico ni muerde ni ladra”, dicen que decía. Hoy, los herederos de Don Porfirio, mañosos en el arte de engañar, expertos en la compra de conciencias, cada vez quedan más al descubierto. Las limosnas no duran toda una vida, tarde o temprano se acaban. Al pueblo no lo podrán engañar por siempre.

México, país que tiene de todo pero que al mismo tiempo lo atracan por todos los ángulos, cuenta con una poderosa mafia que envilece la política y que encima de envilecerla esperan que el pueblo sea quien pague los platos que ellos rompen.

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto a Morena, llegue al poder la reacción de los oligarcas no será pacífica. Las propuestas de Morena serán vistas como una declaración de guerra

por la mafia del poder. Querrán desatar la violencia porque no habrá criminal de cuello blanco en la cárcel solo para apantallar y engañar bobos, sino que serán muchos quienes sean juzgados. Al ver en peligro sus intereses, los altos funcionarios y gobernantes corruptos querrán intimidar por medio de la violencia como suelen hacer. Esto ocurrirá por la sencilla razón de que AMLO propone cortar de golpe a aquellos quienes se roban un buen pedazo del presupuesto nacional.

En Morena luchamos por la vía pacífica para evitar más derramamiento de sangre. Nos preparamos para la cuarta transformación, sin violencia de nuestra parte. Creemos que ya ha sido suficiente violencia. Sin embargo, debemos dejar en claro que nuestro partido-movimiento es pacífico mas no dejado. Ni mucho menos ingenuo.

AMLO, siendo un hombre más de principios que de ideologías, nos enseña que no hay nada más bello que servir al más necesitado; nos enseña que Morena debe ser un referente ético (no robar, no mentir, no traicionar). Y basta ver el inicio de Morena como partido "oficial" para distinguir las muchas cosas que le hacen sobresalir por encima de todos los demás. De diez partidos políticos que hay actualmente en México, Morena es el único partido que es independiente de la mafia del poder. Morena, a diferencia de los otros nueve, cuenta con la mayoría de militantes por convicción. Morena, a diferencia de los demás, es ya un referente ético y cuenta con líderes moralmente superiores a los políticos tradicionales. En fin, para sus militantes, Morena es un modo de vida.

En conclusión, más allá de ser la esperanza de México, Morena es más bien, retomando palabras de Eduardo del Río "Rius", la última esperanza.

Nota: Los candidatos "independientes" merecen ser observados muy de cerca. Candidato "independiente" que no encare al sistema político decadente y que no haga mención sobre la necesidad de cambiarlo de raíz, hay que sospechar de él/ella.

Fuente: Marco I. Dávila en <http://www.rebellion.org/>

NICARAGUA

AJE NICARAGUA ACUSADA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. POBLADORES MOVILIZADOS CONTRA TRANSNACIONAL QUE PRODUCE Y COMERCIALIZA BIG COLA

Desde 2010, pobladores de la Villa Pedro Joaquín Chamorro de Managua, han venido denunciando a la empresa Aje Nicaragua S.A., que produce y distribuye productos de la transnacional peruana Ajegroup (Grupo Aje), por contaminación ambiental. El hecho ya fue ampliamente comprobado y la empresa ha sido sancionada por las autoridades nicaragüenses.

De acuerdo con la información brindada por las más de 35 familias afectadas, la planta de producción de Aje Nicaragua S.A. ha estado vertiendo líquidos contaminantes en un cauce que corre paralelo al muro perimetral de la instalación y que desemboca directamente en el Lago Xolotlán o Managua.

Además, reportan fuertes vibraciones y altos niveles de contaminación acústica por el ruido persistente producido por máquinas y equipos pesados las 24 horas del día, así como olores nocivos a raíz de fugas de gas provenientes de los tanques de alta presión y la acumulación de desechos sólidos que favorecen la proliferación de plagas y enfermedades.

Esta situación, que violenta lo establecido en el permiso ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en 2011, ha sido comprobada en varias ocasiones tanto por las autoridades ambientales municipales y estatales como por la Procuraduría General de la República (PGR).

"Durante cinco años hemos vivido una pesadilla. Nunca se realizó un análisis ambiental, ni se tomó en cuenta a la comunidad al momento de instalar la planta de producción de Aje Nicaragua a escasos metros de nuestras casas y otorgar el permiso ambiental", dijo Carolina Espinoza, pobladora de la Villa Pedro Joaquín Chamorro.

“Hemos estado expuestos a vibraciones, gases, proliferación de plagas y a un ruido excesivo y permanente que superaba los 170 dB (decibeles), es decir casi cuatro veces el límite superior deseable señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ya hay personas que sufrimos de diferentes enfermedades, como zumbido de oídos, dolor de cabeza, trastornos emocionales, insomnios, problemas respiratorios y de la piel”, denunció.

Según ella, existen suficientes elementos que comprueban el desinterés de la empresa por cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, y su estrategia para dilatar el proceso y desgastar la resistencia de los pobladores.

En septiembre de 2012, la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Managua comunicó a Aje Nicaragua S.A. que las inspecciones realizadas verificaron la generación de “niveles de ruido fuera de los parámetros permisibles y descarga de aguas residuales que no están contemplados en el permiso del Marena y fuera de los límites establecidos”.

Pese a las multas impuestas por las autoridades, las protestas y denuncias públicas de los pobladores, y a la demanda judicial interpuesta ante el Ministerio Público en septiembre de 2014, la empresa ha pretendido minimizar lo ocurrido, asegurando que ya acató las disposiciones de las autoridades nicaragüenses. Ese mismo año, la transnacional peruana productora de la marca Big Cola convocó a una audiencia pública, en la que participaron tanto las autoridades como los pobladores, para dar a conocer la propuesta de instalar una segunda línea de producción y solicitar un nuevo permiso de operación.

“Aún no ha cumplido con el primer permiso ambiental y ya está solicitando otro. Aje Nicaragua S.A nunca ha mostrado real interés por respetar nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, y si hubo algún tipo de mejoría ha sido sólo y exclusivamente por la tenacidad y la lucha de los pobladores”, advirtió Octavio Corea, miembro de la Fundación Nicaragüense Pro Desarrollo Comunitario Integral (Fundeci).

Ante este nuevo peligro y la persistencia de contaminación, los pobladores de la Villa Pedro Joaquín Chamorro están pidiendo a las autoridades más firmeza, beligerancia y contundencia en sus acciones. “Instamos al Marena, Ministerio de Salud, PGR, Alcaldía de Managua y al Ministerio Público a no seguir admitiendo la violación de nuestros derechos humanos, actuando en beneficio de la ciudadanía afectada por dicha transnacional”, se lee en un reciente comunicado de los pobladores.

Actualmente, los afectados por la transnacional productora de Big Cola están esperando volver a sentarse con las autoridades y la empresa para escuchar una nueva propuesta de solución a los diferentes problemas que están mermando su calidad de vida. “Nunca vamos a dejar de luchar: Vamos a continuar hasta lograr recuperar nuestras vidas”, aseguró Espinoza.

En su página web oficial, AJE tiene la visión manifiesta que pretende llegar a ser una de las mejores 20 transnacionales en 2020. Creada en 1988 por la familia Añaños, AJE tiene hoy un amplio portafolio de productos -bebidas gaseosas no alcohólicas, aguas, zumos, bebidas hidratantes y energéticas-, con BIG Cola como su marca más emblemática. De acuerdo con datos brindados por la misma transnacional peruana, en 2012 AJE vendió 3.400 millones de litros de bebidas en todo el mundo. Entre 2000 y 2013 tuvo un crecimiento sostenido en volumen de ventas del 22 por ciento.

AJE es actualmente el cuarto mayor productor de bebidas gaseosas (carbonatadas) en el mundo por volumen de ventas y la décima compañía de refrescos (bebidas sin alcohol), generando unos 15.000 empleos entre directos e indirectos. Tiene presencia en más de 20 países de América Latina, Asia y África, y cuenta con 26 instalaciones de fabricación, 89 líneas de embotellado, 100 centros de distribución, 20 líneas de inyección de resina para la fabricación de botellas de plástico y 10 líneas de compresión de tapones instaladas alrededor del mundo.

Además de creer en “un mundo más grande, donde más personas disfrutan de las cosas buenas de la vida, creciendo y prosperando juntos”, AJE asegura que “el negocio debe ser una fuerza para el bien” y sueña con un “mundo mejor y sin límites”, donde haya prosperidad para todos.

“No sé de qué mundo y prosperidad estarán hablando, porque lo que han pretendido hacer acá es tener grandes ganancias sin invertir nada. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera y la generación de empleo, pero nunca a costa de la salud de las personas”, concluyó Corea.

Fuente: Giorgio Trucchi en <http://informes.rel-uita.org/>

REALIZAN EN MANAGUA PRIMERA CUMBRE DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA LATINA

La I Cumbre Latinoamericana de Lideresas Afrodescendientes de las Américas comenzará este viernes en Managua, con el objetivo de aprobar una plataforma política que les ayude a combatir la exclusión y marginación que les afecta.

La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la nicaragüense Dorotea Wilson, dijo en la víspera que en el encuentro, de tres días, aprobarán una plataforma política de cara al decenio de los Afrodescendientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2015-2024).

La plataforma, un sistema integrado de información e inquietudes que compartirán las activistas, recoge 17 ejes relacionados a salud, educación, medio ambiente, protección a las mujeres afrodescendientes, reducción de la pobreza, integración a los sistemas de servicios públicos, entre otros.

Según Wilson, al menos 270 mujeres de 22 países participan en el encuentro en Managua.

De acuerdo con los datos de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que organiza la cumbre, los afrodescendientes representan un 30 % de la población de América Latina, la mitad de ésta compuesta por mujeres.

Fuente: <http://www.elnuevodiario.com.ni/>

PANAMÁ

EL EXPRESO CHINO EN AMÉRICA LATINA

En Panamá no hay seguridad sobre la estabilidad futura del gobierno ni garantías sobre la viabilidad del proyecto de Canal interoceánico ampliado. El presidente Juan C. Varela no logra enderezar la nave del Estado después de 20 años de desgobierno, agudizado durante el último período presidido por Ricardo Martinelli (2009-2014). Por otro lado, el Canal de Panamá, baluarte de un proyecto nacional, pareciera encontrarse empantanado en problemas políticos y técnicos sin solución a la vista. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), recientemente declaró que pronto habrá que decidir entre el uso del agua de la cuenca del río Chagres para el consumo humano de más de un 1.5 millones de panameños o para pasar barcos de un océano a otro. Incluso, los puertos tradicionales del Canal de Panamá – actualmente bajo administración de una empresa anglo-china – se encuentran en medio de batallas internas de empresarios panameños por el control de áreas aledañas a la vía interoceánica. A esta situación se suman las amenazas constantes del consorcio que construye las nuevas esclusas que ampliará la capacidad de la vía. El grupo constructor, cuya sobrevivencia está en cuestión, tiene dos años de atraso y está pidiendo el pago de sobrecostos equivalentes a US\$2.500 millones. La planificación en torno al Canal de Panamá y de las áreas aledañas parecieran estar a punto de colapsar.

La junta directiva de la ACP parece estar más preocupada de los negocios que puede entablar con actuales y futuros socios que en ordenar su propia casa. Sus miembros aún no se han pronunciado sobre la supuesta escasez de agua anunciada por el administrador, tampoco tienen una posición firme frente a las amenazas del consorcio constructor. Además, las noticias publicadas en los medios indican que tienen intereses personales en los nuevos puertos de Rodman y Corozal, vecinos del puerto de Balboa. Mientras que los gobiernos de turno se preocupan de hacer negocios con las ventajas relativas creadas por el traspaso del Canal de manos norteamericanas a Panamá

en 2000, la región observa como China avanza por dos frentes estratégicos para viabilizar nuevas rutas interoceánicas. Por un lado, el Gran Canal de Nicaragua en el cual Pekín ha comprometido una inversión de US\$40 mil millones. Por el otro, el proyecto menos conocido del Ferrocarril Transcontinental Perú-Brasil. La vía férrea atravesaría el mítico bosque de la Amazonía y la cordillera de los Andes, uniendo los océanos Pacífico y Atlántico. Sería financiado también, en gran parte, por China.

Según los cálculos, cada tren transportaría unos 200 vagones de 100 toneladas cada uno. El tren sería una nueva proeza de ingeniería y, también, una bomba que podría poner en peligro el ambiente de una vasta zona del planeta. Se extendería a lo largo de más de 4 mil kilómetros. El tren partiría desde Piura, en el Pacífico, pasaría por Abra de Porculla, un paso andino a 2,200 metros sobre el nivel del mar y cruzaría la frontera peruana rumbo a Porto Velho, en Brasil. Seguiría hasta el puerto de Açú, cerca de Río de Janeiro, en el océano Atlántico.

El primer ministro chino Li Keqiang se reunió recientemente con el presidente Ollanta Humala, en Lima, y Dilma Rousseff, en Brasilia. La potencia suramericana es uno de los proveedores más importantes de China en materia de hierro y soya. China exporta a Brasil bienes manufacturados. Perú serviría de intermediario, aunque también considera que puede aprovechar la nueva vía férrea para exportar materias primas para la potente agro-industria brasileña. El presidente Humala cree que el “proyecto consolidará la posición geopolítica del Perú como puerta natural hacia Sudamérica”. Según el analista peruano, Raúl Mendoza, “los tres países tienen algo que ganar, pero la alianza para impulsar el tren recién comienza”. Mientras China mueve sus fichas en América latina, los gobernantes panameños (y los grupos económicos que se agazapan en su entorno) esperan sentados que las ‘migajas’ del intenso movimiento comercial que ya se inició les caigan del cielo. Son los clásicos ‘rentistas’ incapaces de coordinar un plan de desarrollo que le permita al país avanzar y convertirse en un centro de producción de la región. El expreso chino se mueve por el continente, cruzando cordilleras, partiendo istmos y extrayendo riquezas. Si los ‘rentistas’ no movilizan las enormes fuerzas productivas de la población panameña, tendrán que aparecer otros grupos sociales que lo hagan.

Fuente: <http://www.alainet.org/>

VENEZUELA

MENSAJE DE LA LA FUNDACIÓN LATINOAMERICANA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOCIAL

37 AÑOS DE LA COMUNIDAD ECUMÉNICA DE FUNDALATIN

Hace 37 años, nace en Caracas la Comunidad Ecuménica de la FUNDACIÓN LATINOAMERICANA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOCIAL. FUNDALATIN. En la década de 1970, en plena “guerra fría” con la polaridad Este-Oeste que provocaron las potencias después de la II Guerra Mundial, América Latina estaba bajo dictaduras militares, inspiradas en la doctrina totalitaria de la Seguridad Nacional.

Venezuela era uno de los pocos países en democracia. Recibía migrantes y refugiados. El Concilio ecuménico Vaticano II, de los años 1960, con los papas Juan XXIII y Paulo VI, renueva el catolicismo. En 1968, la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, trae esa dinámica a Nuestra América y junto con la Conferencia de Oaxtepec, México, donde nace el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, incrementa el avance del ecumenismo cristiano. El juicio, a la luz del evangelio, emanado de Medellín, América latina está inmersa en una violencia institucionalizada se hace sentir en las comunidades cristianas.

Con el libro del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez 1971, se sistematiza la teología de la liberación, nacida en el continente mestizo. Con el impulso del padre Olaso S.J, la presidencia del P. Juan Vives Suriá y la confluencia de cristianos latinoamericanos y venezolanos, inspirados en esa teología se crea -09.06.1978- la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social-Fundalatin.

El ingeniero chileno Joaquín Undurraga, primer vicepresidente de FUNDALATIN, formula un plan estratégico. Nace así, Fedefam, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Se impulsa un Encuentro Continental por la Paz en Centroamérica, en la Universidad de Georgetown (EEUU), 1985, con grupos ecuménicos del Norte y Sudamérica, y empezó el trabajo del Año Internacional de la Paz (1986). Luego en 1999, Fundalatin apoya la naciente constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A raíz del golpe del 11/Abril/2002, se apoya a la Fiscalía General de la República, con el P. Vives como Delegado Especial del Fiscal.

Hoy con su participación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Venezuela; con iniciativas como el Premio a los Constructores de la Paz Juan Vives Suriá; impulsando una espiritualidad liberadora mediante publicaciones y los diplomados en DDHH Y Teología de la Liberación, en la Escuela de Derechos Humanos Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría; con el programa de radio Llegó La Hora, hacia una cultura de la solidaridad, intenta seguir haciendo camino al andar siguiendo el Espíritu de Jesús Liberador, con Vives y San Romero América, reconocido por su pueblo y ahora por el Papa Francisco. Espíritu que impulsa a la comunidad para continuar la misión de la construcción del Reino de Dios trascendente, presente en la tierra.

Desde la perspectiva ética de defensa de los derechos humanos, invitamos a las comunidades de buena voluntad, así como de gobiernos responsables, a continuar la misión común de avanzar, en esta hora, en la defensa de todos los derechos humanos, incluyendo los sociales, económicos y políticos y los derechos de la Madre Tierra, hacia otro mundo posible.

Caracas. República Bolivariana de Venezuela.

En el acto conmemorativo de los 37 años de FUNDALATIN. 09 de Junio 2015.

Por FUNDALATIN.

Hna. Eugenia Russián
Presidenta

Ing. Casilda Ramírez
Secretaria Ejecutiva

Ing. Guido Zuleta
Asesor Docente.

GOEBELS EN VENEZUELA: COMUNICADO DEL COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID

Estamos asistiendo a un ataque mediático Internacional contra El Gobierno de Venezuela. En este ataque están involucrados los siguientes medios: CNN (EEUU), el Grupo Prisa (España), el Grupo Clarín (Argentina), la Red O Globo (Brasil), Televisa (México), Fox News (EEUU), El Tiempo (Colombia), entre otras redes regionales, También los políticos Obama, Alvaro Uribe, Felipe González y un largo etc...y se pretende involucrar a los Estados Americanos a la ONU, a la Union Europea y últimamente al Papa Francisco.

La base de esta campaña mediática está en hacer ver al mundo por métodos de Goebels, que los presos de extrema derecha encarcelados, son demócratas opositores pacíficos perseguidos por una brutal dictadura.

Para ello es fundamental silenciar y hacer que se olvide por completo la violencia terrorista que ejercieron, sobre todo las acciones criminales de Voluntad Popular, fundada por Leopoldo López, y las guarimbas

Las guarimbas no fueron manifestaciones pacíficas de la oposición democrática, como quieren hacernos ver, sino una toma de barrios por manifestantes insurrectos con piquetes armados, no con cócteles molotov sino con pistolas y fusiles, que no se limitaron a quemar contenedores, coches y abuchear a los chavistas sino que quemaron edificios oficiales, como la fiscalía, varios centros de salud dirigidos por cubanos y asesinaron a 12 policías y multitud de chavistas.

Recordamos el llamado de "resistencia venezolana" que publicamos hace un año en junio de 2014 como noticia y ahora repetimos como denuncia.

Es importante que detectes a los chavistas en tu cuadra, calle, urbanización, trabajo, aula, fabrica etc, hay que tenerlos marcados porque lamentablemente si queremos salvar a Venezuela, tenemos que hacer una purga inmediata al tomar el control del poder. Nuestros líderes Ledezma, María Corina y Leopoldo, van a pedir insistentemente la renuncia del ilegítimo colombiano que nos gobierna, pero debemos actuar con violencia en cada zona, para que se sienta la presión”...

De estos líderes violentos Leopoldo está en la cárcel y Ledezma en arresto domiciliario. Si se les aplicara la ley antiterrorista española, la ley antidisturbios o la ley mordaza estarían los tres en la cárcel. Pero ya sabemos que para Felipe González y el PP la ley antiterrorista, la ley antidisturbios y la ley mordaza son solo para la izquierda.

15 de junio 2015.

COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID.